



PARTIDO
ALIANZA
CIUDADANA

**REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE JUSTICIA
INTRAPARTIDARIA DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA**

TÍTULO PRIMERO
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA

Capítulo I.
Disposiciones Generales

Artículo 1. Este Reglamento es de aplicación y observancia general para toda la militancia, simpatizantes, candidatas y candidatos e instancias y órganos de dirección y control del Partido en todos sus niveles.

Artículo 2. La aplicación e interpretación de este reglamento se hará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, los ordenamientos federal y locales en materia electoral, los Estatutos del Partido y las normas internas partidistas; conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; así como, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.



Artículo 3. La Comisión de Justicia Intrapartidaria tiene su domicilio en la Ciudad de Chilpancingo y ejerce jurisdicción en todo el Estado, teniendo como prioridades verificar el estricto cumplimiento de la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, vigilar que se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones de las y los militantes y simpatizantes en lo individual y de los órganos, mecanismos y estructuras del mismo, así como las determinaciones de sus órganos en el ámbito de su competencia.

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

- I. **Partido:** El Partido Alianza Ciudadana;
- II. **Comisión Ejecutiva:** La Comisión Ejecutiva Estatal, órgano colegiado y permanente de dirección política y administrativa, responsable de la conducción de las actividades y aplicación de las políticas del Partido Alianza Ciudadana;
- III. **Estatutos:** Estatutos del Partido Alianza Ciudadana;
- IV. **Comisión de Justicia:** El órgano estatal encargado de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones de las y los militantes, así como de instruir y resolver los procedimientos disciplinarios, de acuerdo con los Estatutos del Partido;
- V. **Reglamento:** El presente Reglamento de la Comisión Estatal de Justicia;
- VI. **Militante:** Persona afiliada al Partido Alianza Ciudadana;
- VII. **Autoridad Responsable:** Aquella autoridad interna del Partido que haya emitido el acto o resolución impugnado;
- VIII. **Mecanismos Alternativos:** La mediación, la conciliación y la junta restaurativa;
- IX. **Conciliación:** mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados;
- X. **Solicitante:** La persona física o moral que acude a los Órganos de Justicia Alternativa, con la finalidad de buscar la solución de una controversia pena;
- XI. **Requerido:** La persona física o moral convocada para solucionar la controversia penal mediante la aplicación de un mecanismo alternativo;
- XII. **Intervinientes:** Las personas que participan en los Mecanismos Alternativos, en calidad de Solicitante o de Requerido, para resolver las controversias de naturaleza penal;
- XIII. **Facilitador:** persona designada por la Comisión de Justicia cuya función es facilitar la participación de los Intervinientes en la conciliación como Mecanismo Alternativo;
- XIV. **Tribunal Electoral:** Instancia competente para conocer de los medios de impugnación presentados, de acuerdo con la normativa vigente;




Capítulo II.

De la integración del Órgano de Justicia Intrapartidaria

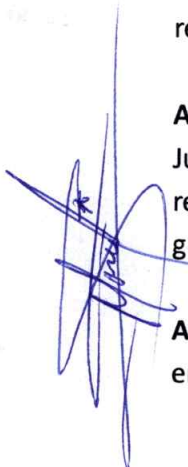
Artículo 5. La Comisión Estatal de Justicia es un órgano de decisión colegiada integrado por un número impar de integrantes, independiente e imparcial encargado de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones de las y los militantes, instruir y resolver los procedimientos disciplinarios que se sigan en contra de la militancia o funcionariado del Partido, en el caso de que infringieran las disposiciones internas o la normatividad de la materia, a través de un acceso efectivo y eficaz a la justicia pronta y expedita.

La Comisión tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, asegurando que se respeten las garantías procesales mínimas de las partes, y promoviendo la igualdad de género y la erradicación de cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. En todo momento se respetarán las garantías procesales mínimas y los plazos establecidos en los reglamentos correspondientes asegurando el derecho de audiencia y defensa.



Artículo 6. La Comisión de Justicia se integra por tres titulares militantes destacados del Partido y dos vocales, nombrados paritariamente por la Asamblea General Estatal, por un periodo de tres años y podrán ser reelectos por un periodo inmediato.

Artículo 7. Los y las integrantes de la Comisión de Justicia no podrán formar parte de ningún otro órgano de gobierno y dirección del Partido, no podrán participar en los procesos electorales internos, ni ser postulados en candidaturas de elección popular durante su encargo, gozarán de inamovilidad salvo en los casos y formalidades establecidos en los Estatutos y el presente reglamento.



Artículo 8.- Las determinaciones y actuaciones de los y las integrantes de la Comisión de Justicia se registrarán bajo los principios de independencia, imparcialidad, legalidad, integridad, respeto, transparencia, enfoque diferencial, interseccionalidad, interculturalidad, perspectiva de género y enfoque territorial.

Artículo 9.- Las personas integrantes de la Comisión de Justicia podrán ser removidos del cargo en las siguientes circunstancias:

- I. Muerte del o la integrante;
- II. Renuncia voluntaria;
- III. Ser sentenciados por delitos dolosos;

- IV. Acumular dos inasistencias consecutivas injustificadas;
- V. Por agresión física a un miembro de la comisión o integrante del Partido;
- VI. Por haber sido condenado (a) por violencia familiar;
- VII. Por haber sido condenado (a) por delitos de agresión sexual; y
- VIII. Por ser deudor (a) alimentario;
- IX. Incumplimiento de sus obligaciones;
- X. Excederse en sus facultades.
- XI. Por ejercer Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

A excepción de los contenidos en las fracciones I, II, IV, IX, la causal dará inicio a un proceso sancionador.

Capítulo III.

De las sesiones de la Comisión

Artículo 10.- La Comisión sesionará de forma ordinaria y extraordinaria, observando lo siguiente:



- I. Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes mediante convocatoria por escrito enviada dos días hábiles de antelación a la fecha de celebración.
- II. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando a juicio de alguno de los titulares de la comisión se considere conveniente o por solicitud de la Secretaría General; atenderán únicamente los asuntos urgentes para los que fue expresamente convocada que no puedan esperar hasta la próxima sesión ordinaria. Las convocatorias a sesión extraordinaria serán notificadas por lo menos con doce horas de anticipación a la fecha de celebración.

Artículo 11.- La convocatoria de la Comisión deberá contener:

- I. Lugar y fecha de expedición de la Convocatoria.
- II. Especificación del tipo de sesión a realizarse, sea ordinaria o extraordinaria.
- III. Indicación del lugar, fecha y hora exacta de la celebración de la sesión.
- IV. Presentación del orden del día que detalle los temas y asuntos a tratar durante la sesión.
- V. Adjuntar los anexos necesarios, si los hubiera, para su revisión y análisis por parte de los miembros de la Comisión.

Durante las sesiones extraordinarias no podrá darse cuenta ni trámite o asunto alguno que no esté comprendido en el orden del día. El orden del día no incluirá asuntos generales.

La convocatoria podrá ser entregada en formato físico o digitalizado, asegurando una notificación oportuna a las y los miembros de la Comisión.

Artículo 12 .- Los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias se señalará en el orden del día, con la prelación siguiente:

- I. Lista de asistencia;
- II. Declaración de quórum legal;
- III. Lectura del orden del día y aprobación en su caso;
- IV. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso;
- V. Informes;
- VI. Presentación de proyectos, de acuerdo o resoluciones, según corresponda.
- VII. Peticiones formuladas por la Asamblea General; Consejo Político y/o Comisión Ejecutiva Estatal;
- VIII. Seguimiento de asuntos pendientes; y
- IX. Asuntos generales.



RTIDO
ANZA
ADANA
RÍA EJECUTIVA

Artículo 13.- Los asuntos a tratar en sesiones extraordinarias se enlistan en la prelación siguiente:

- I. Lista de asistencia y declaración de quórum.
- II. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación.
- III. Lectura del acta de la sesión anterior, y
- IV. Asunto o asuntos urgentes a tratar.

Artículo 14.- La Comisión podrá instalarse en sesión permanente cuando así lo estime conveniente para el tratamiento de asuntos que por su propia naturaleza o por disposiciones de la ley no deba interrumpirse, cuando la comisión esté en sesión permanente, se podrán decretar los recesos que fueren necesarios durante la sesión.

Las sesiones permanentes concluirán una vez que se hayan desahogado los asuntos que motivaron su declaratoria.

Artículo 15.- El quórum legal para que la Comisión pueda sesionar es de cuando menos tres de sus integrantes, dos de las asistencias deberán corresponder a personas titulares.

Artículo 16.- Los acuerdos serán aprobados por la mayoría de las y los comisionados presentes, estos constituyen disposiciones de carácter obligatorio para las instancias estatales y

municipales, así como para los aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatos y candidatas a cargos de dirección o cargos de elección popular.

Todo acuerdo, resolución o procedimiento disciplinario, deberá ser notificado personal o digital a los y las interesadas directas e indirectas y será publicado en los estrados físicos y electrónicos del Partido, salvo los que por disposiciones legales requieran otro tratamiento de la información y datos personales.

Artículo 17.- Una vez concluida la sesión y tratado el asunto correspondiente, la Comisión deberá presentar un informe detallado de sus acuerdos, resoluciones o procedimientos disciplinarios a la Secretaría Ejecutiva del Partido. Este informe deberá ser entregado en un plazo máximo de 72 horas a partir del término de la sesión.

El informe proporcionará un registro completo y preciso de las decisiones tomadas durante la sesión, así como de cualquier otro asunto relevante que haya sido discutido.

Capítulo III.

De las atribuciones ,facultades y obligaciones de la Comisión de Justicia y de sus integrantes



PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
SECRETARÍA
EJECUTIVA

Artículo 18. Son atribuciones de la Comisión Estatal de Justicia, las siguientes:

- I. Garantizar el orden jurídico que rige al Partido conforme a la norma aplicable.;
- II. Evaluar el desempeño de los militantes del Partido, que ocupen cargos de elección popular o que funjan como servidores en los poderes públicos, a fin de constatar que sus resultados de gestión se hayan realizado con apego a los Documentos Básico del partido.
- III. Emitir recomendaciones cuando se consideren necesarias, para corregir actos irregulares de los militantes, fundando y motivando los razonamientos respectivos.
- IV. Determinar las responsabilidades que resulten procedentes, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa interna del Partido.
- V. Aplicar sanciones a los militantes que infrinjan la normativa interna del partido, conforme a lo establecido en el artículo 132 de este Estatuto, cuyo procedimiento será expedito y la resolución deberá ser dictada dentro de los términos establecidos por las normas electorales aplicables.
- VI. Presentar al Consejo Político Estatal el informe anual de labores, a fin de que se incluyan en el presupuesto, aquellas actividades que justifiquen su inclusión.

- VII. Garantizar la imparcialidad, legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones que se deriven de los procesos internos.
- VIII. Recibir y sustanciar las controversias derivadas del desarrollo de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.
- IX. La Comisión de Justicia debe observar en sus procedimientos los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, celeridad, economía procesal, publicidad y definitividad.
- X. Conocer sobre los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
- XI. Las demás que le confieran los Estatutos y la normativa partidaria aplicable.

Artículo 19.- Son obligaciones de la Comisión Estatal de Justicia, las siguientes:



- I. Incluir en sus resoluciones medidas de restitución;
- II. Incluir en sus resoluciones medidas de rehabilitación;
- III. Incluir en sus resoluciones medidas de compensación;
- IV. Incluir en sus resoluciones medidas de satisfacción;
- V. Incluir en todas sus resoluciones medidas de reparación integral del daño;
- VI. Incluir en todas sus resoluciones medidas de no repetición;
- VII. Aplicar en sus resoluciones los enfoques diferencial, interseccional, intercultural, territorial y perspectiva de género según aplique el caso;
- VIII. Incluir en sus resoluciones las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
- IX. Sancionar las conductas contrarias a los estatutos;
- X. Emitir sus resoluciones en un plazo máximo de 60 días naturales.

Artículo 20.- Son facultades de las y los titulares de la Comisión de Justicia, las siguientes:

- I. Presidir rotativamente las sesiones de la Comisión;
- II. Delegar facultades para el cumplimiento de las funciones de la Comisión en los términos de su competencia;
- III. Convocar a las sesiones de trabajo de la Comisión de Justicia;
- IV. Desahogar los asuntos, dirigir los debates, guardar el orden en las sesiones de trabajo de la Comisión de Justicia;
- V. Solicitar la información necesaria a las personas, instancias u órganos del Partido para cumplir adecuadamente la sustanciación o resolución de los expedientes a cargo de la Comisión de Justicia;
- VI. Firmar y autorizar las actas de acuerdos, en las que consten las deliberaciones, resoluciones y sentencias, emitidas por la Comisión de Justicia;

- VII. Dictar las medidas de apremio para hacer cumplir las sentencias de la Comisión de Justicia;
- VIII. Coordinar y rendir el informe anual de la Comisión de Justicia al Consejo Político Estatal;
- IX. Representar a la Comisión de Justicia; y,
- X. Las demás que le confieran los Estatutos y las disposiciones aplicables.

Artículo 21.- Son facultades del secretario de la Comisión de Justicia, las siguientes:

- I. Proponer el orden del día de las sesiones;
- II. El desahogo de los asuntos de la competencia de la Comisión de Justicia;
- III. Elaborar las actas y documentos de las sesiones;
- IV. Realizar las diligencias de notificación por los medios e instancias respectivas;
- V. Resguardo del registro cronológico de las sesiones, las audiencias de conciliación y procesos sancionadores;
- VI. Expedir copias simples de las actas de acuerdo, deliberaciones, resoluciones y sentencias requeridas a petición de parte interesada por escrito;
- VII. Asistir, junto con el presidente, a los actos en los que tenga competencia la Comisión de Justicia;
- VIII. Suplir a la Presidencia en ausencia temporal del titular; y,
- IX. Las demás que le confieran los Estatutos y las disposiciones aplicables



PARTIDO
LIANZA
JDABANA
SECRETARÍA EJECUTIVA

Capítulo IV.

De la competencia de la Comisión

Artículo 22.- Serán competencia de la Comisión de Justicia:

- I. Las denuncias por actos u omisiones en la interpretación de los derechos estatutarios;
- II. Las denuncias contra la actuación y resoluciones de los órganos de dirección partidista;
- III. Todo procedimiento sancionador considerado en los reglamentos de los órganos del Partido;
- IV. Las inconformidades en contra del proceso y resultados de una contienda electoral interna;
- V. Las denuncias en que militantes o integrantes de órganos de dirección o de representación partidista, en todos sus niveles, hayan incurrido en actos que causen perjuicio al Partido, se cometa violación a la Declaración de Principios, Estatutos, Programa de Acción o contravengan las disposiciones democráticas de los órganos directivos;

- VI. Las denuncias que presentan las militantes y simpatizantes del Partido en temas de violencia política en razón de género
- VII. Gestionar los procedimientos sancionadores contemplados en los reglamentos de los órganos del Partido.
- VIII. Las demás denuncias que requieran tramitación y resolución de conflictos, competencia de la Comisión de Justicia, promovidos ante ella por los militantes y órganos de dirección del Partido.

Artículo 23.- Son consideradas infracciones a la vida interna y normatividad del Partido, las siguientes:

- I. El Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Estatutos, los reglamentos y demás ordenamientos internos del Partido;
- II. Violentar o atentar contra la Plataforma Política, Programa, Principios y la organización partidista;
- III. Hacer públicos asuntos que perjudiquen los objetivos institucionales del partido, sus órganos, miembros, grupos, dirigentes o candidatos, sin antes haber intentado, de manera explícita, reiterada y por escrito, discutirlos internamente con todas las instancias y dirigentes que arbitran la vida partidista;
- IV. Solicitar recursos en efectivo o en especie a nombre del Partido, sin autorización de los órganos internos;
- V. Promover, apoyar, llamar a votar o impulsar fuerzas políticas, miembros, precandidatos o candidatos de otros partidos políticos cuando no exista coalición o alianzas debidamente contempladas en la legislación y la línea política del partido; y
- VI. Promoverse o ser precandidato o candidato de otro partido político siempre y cuando no exista coalición o alianza debidamente contemplada en la legislación y la línea política del partido.
- VII. Cometer por sí o por interpósita persona actos de violencia política contra las mujeres militantes, simpatizantes, precandidatas, candidatas y dirigentes en razón de género.



Artículo 24.- Las infracciones señaladas en los Estatutos, los reglamentos y en cualquiera de los ordenamientos que rigen la vida interna del Partido, la Comisión de Justicia podrá sancionarlas mediante:

- I. Amonestación privada;
- II. Amonestación pública;
- III. Suspensión temporal de derechos partidistas;
- IV. Inhabilitación para desempeñar un cargo o comisión dentro del Partido;

- V. Impedimento para ser postulado a cargos de elección popular;
- VI. Cancelación de la precandidatura o candidatura a cargos de elección; o
- VII. Expulsión del Partido;

Artículo 25.- La Comisión de Justicia fundamentará y motivará sus resoluciones con base en el reglamento e instrumentos legales correspondientes a cada caso y cumplirá con las siguientes características normativas:

- I. Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita;
- II. Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna;
- III. Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y
- IV. Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los derechos político-electorales en los que resientan un agravio.



PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
COMISIÓN EJECUTIVA

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS PROCEDIMIENTOS

Capítulo I

De las partes

Artículo 26.- Son partes en el procedimiento:

- I. La o el actor o promovente, que es la o el militante o simpatizante quienes estando legitimados lo presenten por sí mismos o, a través de representante designado, en los términos establecidos en este reglamento y las convocatorias aplicables;
- II. La autoridad u órgano partidario responsable que haya emitido u omitido el acto o resolución que se impugna; y
- III. El tercero interesado.

Capítulo II

Del escrito inicial

Artículo 27.- El escrito inicial de la denuncia deberá presentarse por escrito ante la Comisión Estatal de Justicia Intrapartidaria y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- a) Hacer constar el nombre de la parte actora.
- b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir en la Ciudad Chilpancingo, sede del Órgano único de Impartición de Justicia Intrapartidaria.
- c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del promovente, así como su interés jurídico.
- d) Señalar el nombre de la parte demandada y su domicilio e identificar la violación imputada.
- e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en los que se funda su denuncia y los preceptos presuntamente violados.
- f) Ofrecer y aportar las pruebas y mencionar, en su caso, las que deben requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas.
- g) Hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

Artículo 28.- Cuando en el escrito inicial de denuncia, se incumpla alguno de los requisitos previstos en los incisos d), e) y f), y éstos no se puedan deducir del expediente, se deberá formular un requerimiento por el término de 24 horas con el apercibimiento de tenerlo por no presentado si no se cumple con el mismo; en el caso que se incumpla con alguno de los requisitos señalados en los incisos a), y g) o resulte evidentemente frívolo, se desechará de plano.

Artículo 29.- Procede el sobreseimiento cuando, el o la denunciante se desista expresamente por escrito; o bien cuando fallezca, o sea suspendido o privado de sus derechos partidistas o transcurran más de 60 días, sin que en el expediente relativo se reciba promoción de parte para su impulso procesal; siempre y cuando la denuncia no verse sobre presuntas faltas graves. Ésta previsión no surtirá su efecto cuando se encuentre alguna prueba pendiente de desahogar.

Artículo 30.- Con objeto de que la denunciada o denunciado conozca los hechos que se le imputan, la Comisión, ordenará correrle traslado con la copia del escrito de la denuncia y sus anexos, y se le emplazará para que la conteste dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y manifieste lo que a su derecho convenga. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por confesa o confeso de los hechos u omisiones que se le imputan.

Artículo 31.- La denunciada o denunciado formulará la contestación por escrito en los siguientes términos:

- a) Indicará su nombre y apellidos, el domicilio para oír y recibir notificaciones inclusive las de carácter personal, en la Ciudad Chilpancingo.
- b) Se referirá a cada uno de los hechos en que la parte actora funde su petición, en los cuáles precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición.
- c) Ofrecer y aportar las pruebas y mencionar, en su caso, las que deben requerirse, cuando justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas.
- d) Se asentará el nombre y firma autógrafa de la parte demandada.
- e) Todas las excepciones que se tengan cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueran supervenientes.

De las excepciones se le dará vista a la parte actora para que, en un término de tres días siguientes a su notificación, las conteste y rinda las pruebas que considere oportunas.

Artículo 32.- Los escritos de la o el tercero interesado deberán cubrir los siguientes requisitos:

- I. Presentarse dentro de los plazos establecidos;
- II. Presentarse ante la autoridad responsable del acto o resolución impugnados;
- III. Hacer constar el nombre del o la tercera interesada;
- IV. Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ubicación territorial de la Comisión;
- V. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del compareciente, de conformidad con lo previsto en este Código;
- VI. Precisar la razón del interés legítimo en que se funde; así como, las pretensiones concretas del compareciente;
- VII. Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo para su presentación y solicitar se requieran las que no tenga a su alcance, en cuyo caso, el o la promovente deberá justificar que las ha solicitado oportunamente al órgano partidario o a la autoridad competente. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con este requisito; y
- VIII. Hacer constar el nombre, la firma autógrafa de la o el compareciente.

Artículo 33.- Cuando el escrito de quien comparezca con el carácter de tercero interesado se presente fuera del plazo previsto en este reglamento, se tendrá por no interpuesto; de igual manera, en aquellos casos en los cuales el escrito carezca de firma autógrafa.

Capítulo III

De las pruebas

Artículo 34.- Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

Artículo 35.- Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:

- I. Documentales públicas;
- II. Documentales privadas;
- III. Técnicas;
- IV. Pericial, cuando los medios de impugnación no se encuentren vinculados a los procesos internos de elección de dirigencias y postulación de candidaturas, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos, sea ofrecida junto con el escrito de impugnación, se señale la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes, se especifique lo que pretenda acreditarse con la misma y se señale el nombre del perito que se proponga, exhibiendo su acreditación técnica;
- V. Presuncional legal y humana;
- VI. Instrumental de actuaciones; y
- VII. La confesional y la testimonial, cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y, siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

Artículo 36.- La Comisión tiene amplias facultades en lo que corresponde a las pruebas que estimen pertinentes para resolver los medios sujetos a su conocimiento. La o el Comisionado Presidente, durante la fase de instrucción, mediante el acuerdo correspondiente, podrá requerir a los diversos órganos partidarios competentes, cualquier informe o documento que, obrando en su poder, sirva para la justificación de un hecho controvertido. El órgano del Partido requerido deberá proporcionar de inmediato los informes o documentos que se le soliciten y obren en su poder.

Artículo 37.- Son pruebas documentales públicas, en original y/o copia certificada, las siguientes:

- I. Las actas de nacimiento;
- II. La documentación que apruebe la Comisión de Procesos Internos respectiva para el desarrollo de un proceso interno determinado;
- III. Las actas levantadas en las sesiones de los órganos partidarios;

- IV. Los documentos auténticos, expedidos por funcionarios que desempeñen cargos de dirección partidaria, en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones;
- V. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten;
- VI. Los documentos auténticos, libros de actas y registros que se hallen en los archivos del Partido;
- VII. Las certificaciones de constancias, existentes en los archivos del Partido expedidas por funcionarios a quienes compete;
- VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie; y
- IX. Los demás a los que se les reconozca ese carácter por la ley.

Artículo 38.- Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas no previstas en el artículo anterior y que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y estén relacionadas con sus pretensiones o defensas.

Artículo 39.- Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Comisión de Justicia para resolver.

Artículo 40.- El aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba técnica.

Artículo 41.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Artículo 42.- Las documentales privadas, las técnicas, las periciales, la presuncional en su doble aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, sólo harán prueba plena cuando a juicio de la Comisión los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Artículo 43.- En ningún caso se admitirán las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla serán las pruebas supervenientes, entendiéndose por tales, los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, pero que el actor, el compareciente o la autoridad partidaria no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por



PARTIDO
ANZA
ADANA
COMISIÓN EJECUTIVA

[Handwritten signature]

existir obstáculos cuya superación no estaba a su alcance, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.

Capítulo IV

De las notificaciones

Artículo 44.- Las notificaciones del inicio de procedimiento disciplinario y las resoluciones definitivas serán realizadas en forma personal en el domicilio señalado por las partes en la Ciudad de Chilpancingo; en caso de no hacerlo las notificaciones se realizarán por estrados. Para tales efectos, dicha Comisión habilitará a los notificadores respectivos.

Artículo 45.- Las notificaciones del acuerdo que deseche el escrito inicial del medio de impugnación y el que contenga la resolución que dicte la Comisión deberán hacerse personalmente; las demás que se requieran para la sustanciación del procedimiento se harán por cédula publicada en estrados.

Artículo 46.- Las cédulas de notificación personal deberán contener:



- I. La descripción del acto o resolución que se notifica;
- II. La autoridad que lo dictó;
- III. Lugar, hora y fecha en que se hace; así como, el nombre de la persona con quien se atiende la diligencia;
- IV. La fecha del acuerdo, acto o resolución que se notifica y nombre de la persona a quien se realiza; y
- V. Nombre y firma de la o el actuario o notificador habilitado.

Artículo 47.- Los órganos partidarios siempre serán notificados mediante oficio, en el que deberá exigirse firma de recibido. En caso de que el destinatario o la persona que reciba el oficio se niegue a firmar, la o el actuario o notificador habilitado levantará el acta correspondiente y asentará constancia de dicha circunstancia en la copia del oficio.

Artículo 48.- Las notificaciones por estrados se sujetarán a lo siguiente:

- I. Se fijará copia del auto, acuerdo, resolución o sentencia; así como, de la cédula de notificación correspondiente, asentando la razón de la diligencia en el expediente respectivo; y
- II. Los proveídos de referencia permanecerán en los estrados durante un plazo mínimo de cuatro días.

Capítulo V

De los plazos

Artículo 49.- Una vez recibida la denuncia o querella, por la Comisión de Justicia, se abrirá y registrará el expediente del caso, mismo que contendrá una breve relación de los hechos, examinará la controversia y determinará una solución factible para los intervinientes. Cuando se estime de manera fundada y motivada que el asunto no es susceptible de ser resuelto se le comunicará al solicitante, diez días hábiles después del día de haber entregado la solicitud.

Artículo 50.- Durante los procesos internos de elección de dirigencias y postulación de candidaturas todos los días y horas son hábiles. Los términos se computarán de momento a momento y, si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.

Los asuntos que no guarden relación con los procesos internos de elección de dirigencias y postulación de candidaturas, no se sujetarán a la regla anterior. En este caso, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales, todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determinen las leyes.

Artículo 51.- Los asuntos que guarden relación con los procesos internos de elección de dirigencias y postulación de candidaturas, deberán presentarse dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas a partir del momento en que se notifique o se tenga conocimiento del acto o resolución que se combata.

El juicio para la protección de los derechos partidarios de la o del militante deberá interponerse dentro de los cuatro días hábiles contados a partir del día siguiente del que se hubiese notificado, publicado o conocido el acto o resolución impugnado.

Artículo 52.- Los terceros interesados podrán solicitar copia del escrito de demanda y sus anexos a partir del momento en que se publique en estrados por la autoridad responsable el medio de impugnación correspondiente y comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

Los terceros interesados podrán comparecer dentro del plazo de publicitación en estrados de los medios de impugnación respectivos.

Capítulo VI

De las Audiencias



IDO
NZA
DANA
EJECUTIVO

Artículo 53.- En casos de controversia entre dos o más partes, se llevará a cabo una audiencia inicial, en la cual se instará a las partes involucradas a intentar llegar a un acuerdo conciliatorio con respecto a las pretensiones que han dado lugar al proceso disciplinario. En el caso de que no sea posible alcanzar una conciliación, se documentarán los hechos y las declaraciones de los comparecientes, los cuales se registrarán en el expediente y se procederá a continuar con la resolución de la controversia.

Artículo 54.- En caso de que las partes lleguen a un acuerdo durante la audiencia inicial, se redactará un acta detallada de los hechos y de lo acordado por los comparecientes. Dicha acta será firmada por las partes involucradas y servirá como resolución definitiva del asunto.

La audiencia de conciliación sólo podrá ser conducida por las partes involucradas y no por sus representantes legales.

Artículo 55.- Al concluir la audiencia, se concederá a las partes un término de tres días para que si así lo estiman procedente rindan sus alegatos por escrito. Transcurrido el término para que los rindan, la Comisión contará con un plazo de doce días hábiles para dictar la resolución correspondiente.

Artículo 56.- Los integrantes de la Comisión resolverán en una sesión deliberativa privada, la decisión que corresponda por mayoría de sus integrantes.



Capítulo VII

De las sanciones

Artículo 57.- El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse de oficio, una vez agotada la conciliación a través de una audiencia.

ADANA

Artículo 58.- La Comisión de Justicia instruirá las diligencias necesarias para la citación del o la militante requerido a fin de garantizar el debido proceso, su derecho de audiencia y defensa, en los procedimientos sancionatorios.

Artículo 59.- No se podrá imponer sanción alguna si no se comprueba la falta con pruebas sólidas que sustenten la acusación. Las resoluciones de sanción serán fundadas y motivadas, atendiendo a la gravedad de la falta, los antecedentes del infractor y la proporcionalidad de la sanción.

Artículo 60.- Las resoluciones que decreten una sanción disciplinaria asumen la categoría de ejecutorias, transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que fueron notificadas, si la persona sancionada o el órgano directivo que excitó el proceso disciplinario en su caso, no las han impugnado.

Artículo 61.- En el caso de que se instaure una controversia contra alguno de los miembros que integran la Comisión Estatal de Justicia, dicho miembro se excusará de participar en el caso específico.

Capítulo VIII

De las medidas cautelares

Artículo 62.- Las medidas cautelares a petición de parte, deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se fundamente la implementación de las mismas.

Artículo 63.- La Comisión deberá acordar la procedencia de las medidas cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de la queja, o en su caso, del inicio del procedimiento de oficio, a fin de lograr la cesación de actos o hechos que constituyan infracciones a la norma, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales internos, la vulneración de los bienes jurídicos tutelados en los Documentos Básicos del Partido y de los acuerdos emitidos por órganos partidarios y reglamentos.



RTIDO
IANZA
DADANA
RÍA EJECUTIVA

Capítulo IX

De las resoluciones

Artículo 64.- La Resolución emitida por la Comisión es la solución final a un problema concreto, sustentada en argumentos y razonamientos que justifican la consecuencia de derecho impuesta a las partes de un caso en concreto.

Artículo 65.- Las resoluciones que emita la Comisión no podrán ser mayores a 60 días contados a partir de la radicación del Expediente.

Artículo 66.- Las Resoluciones de la Comisión tendrán, como mínimo, los siguientes elementos:

- I. Datos de identificación o rubro. Debe contener la información indispensable para identificar el asunto: el tipo de asunto, el número de expediente, el nombre de la o el actor y el nombre de la o el acusado o autoridad responsable;
- II. Encabezado. Señala el lugar y fecha en que se dicta la resolución;
- III. Resultandos. Es una síntesis de los hechos que anteceden a la emisión de la Resolución, que se estiman jurídicamente relevantes para comprender el desarrollo del procedimiento como: presentación de la queja, prevención, admisión, Audiencias estatutarias, requerimientos, cierre de instrucción y demás diligencias del caso y elementos relevantes del expediente;
- IV. Considerandos. Son los razonamientos expresados por la Comisión mediante los cuales se exponen los motivos y argumentos lógico-jurídicos que fundamentan la resolución final del caso en concreto;
- V. Puntos resolutivos. Son los puntos mediante los cuales la Comisión declara el sentido de la Resolución;
- VI. Pie. Se debe indicar cuál fue la votación del asunto, si por unanimidad o por mayoría de votos. En caso de que la Resolución se hubiese votado por mayoría de votos, debe precisarse quién o quiénes fueron disidentes y señalarse si formula o no voto particular;
- VII. En su caso, voto particular. Es el voto que emiten una o varias de las personas Comisionadas en el que se expresan las razones y el sentido del desacuerdo con respecto a la emisión de una Resolución votada por mayoría.



PARTIDO
ANZA
ADANA
RIA EJECUTIVA

TITULO TERCERO

De las defensoría de la militancia

Artículo 67.- El Partido contará con una Defensoría de la militancia, nombrada por el Consejo Político Estatal, por un periodo de tres años y podrá ser reelecto por un periodo inmediato. No podrá participar en los procesos electorales internos, ni ser postulado en candidaturas de elección popular durante su encargo, gozarán de inamovilidad salvo en los casos y formalidades establecidos en los Estatutos y el presente reglamento.

Artículo 68.- El o la defensora de la militancia será un ente autónomo, que actúa bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria para garantizar el debido proceso de las y los afiliados en los asuntos disciplinarios que les correspondan.

Artículo 69.- Son facultades y atribuciones del Defensor de la militancia, las siguientes:

- I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las y los militantes sujetos a un proceso sancionatorio en los términos del presente Reglamento.
- II. Representar y ejercer ante las instancias competentes los intereses y los derechos jurídicos de sus defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a Derecho que resulte en una eficaz defensa;
- III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados;
- IV. Vigilar el respeto a los derechos humanos y las garantías de sus representados;
- V. Promover cualquier otro medio legal de defensa, cuando aquellos se estimen violentados;
- VI. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervenga, desde que se le turnen hasta que termine su intervención;
- VII. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa, y
- VIII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 70.- En los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, la Comisión de Justicia actuará conforme a los lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que los Partidos Políticos Prevengan, Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.



Artículo 71.- El procedimiento se llevará a cabo respetando las siguientes garantías:

- I. **Respeto y protección de las personas.** Las actuaciones y diligencias deben ocurrir con el mayor respeto a todas las personas implicadas, que en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo.
- II. **Confidencialidad.** Todas las consultas o denuncias que se tramiten sobre posibles situaciones de violencia política deben estar protegidas por el principio de confidencialidad. Desde el momento en que se presente la denuncia, la persona o personas responsables de su tramitación asignarán códigos numéricos identificativos tanto a la mujer presuntamente violentada como al presunto perpetrador, preservando así su identidad. La confidencialidad se mantendrá hasta que finalice el procedimiento o la víctima lo decida.
- III. **Personal calificado.** A fin de garantizar el procedimiento, el Partido contará con personas capacitadas en materia de violencia contra las mujeres.

- IV. **Debida diligencia.** La investigación y resolución del caso se ha de llevar a cabo con la debida diligencia y celeridad con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente los derechos político-electorales de las partes o hacer inejecutable la resolución final que se emita.
- V. **Imparcialidad y contradicción.** El procedimiento debe garantizar la audiencia imparcial y un trato justo a todas las personas implicadas. Todas las personas que intervengan en el procedimiento deben actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
- VI. **Prohibición de represalias.** Se prohíben expresamente las represalias contra las personas que presenten una denuncia, que comparezcan para dar testimonios o que participen en una investigación sobre violencia política contra las mujeres.
- VII. **Colaboración:** Todas las personas que sean citadas en el transcurso de la aplicación de este procedimiento tienen el deber de implicarse y de prestar su colaboración.
- VIII. **Obligación de denunciar.** Cualquier persona afiliada, simpatizante o integrante del partido político, tiene la obligación de poner en conocimiento del órgano instructor los casos de posible violencia política contra las mujeres que conozca.



PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
ADANA
RÍA EJECUTIVA

Artículo 72.- La Comisión de Justicia adoptará las medidas cautelares Las medidas cautelares como finalidad del cese inmediato de actos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Podrán ser ordenadas, de manera enunciativa, las siguientes:

- I. Análisis de riesgos y plan de seguridad conforme;
- II. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones, por las mismas vías en que fue cometida la falta;
- III. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
- IV. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora cuando así lo determine la gravedad del acto, y
- V. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o víctimas indirectas que ella solicite.

Las medidas cautelares podrán ser ordenadas o solicitadas por el órgano de justicia intrapartidaria y solicitadas por la víctima, las instancias de mujeres de los partidos políticos y las instituciones internas que se creen para dar seguimiento a los casos.

Artículo 73.- La Comisión de Justicia remitirá por la vía más expedita la recepción de denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de la recepción del escrito o documento que contenga la queja o denuncia, o de que tenga conocimiento de los hechos al órgano encargado de proporcionar asesoría, orientación y acompañamiento adecuados a las víctimas.

Artículo 74.- La Comisión de justicia suscribe las sanciones y medidas de reparación en términos de los Estatutos y el Protocolo de Prevención, Atención, Sanción y Reparación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Partido Alianza Ciudadana, a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde con lo previsto en la legislación y normatividad aplicable en la materia, incluyendo a las personas precandidatas y candidatas que no se encuentran afiliadas al partido, pero compitan bajo las siglas de un partido político o coalición.

Artículo 75.- En los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, se deberán imponer medidas para la reparación integral del daño a la víctima. Las medidas de reparación integral que podrán prever los partidos políticos podrán ser, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

- I. Reparación del daño de la víctima;
- II. Restitución del cargo o comisión partidista de la que hubiera sido removida;
- III. Restitución inmediata en el cargo, precandidatura o candidatura a la que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;
- IV. Disculpa pública, y
- V. Medidas de no repetición.

Artículo 76.- En ningún caso de violencia política contra las mujeres en razón de género procederán Mecanismos Alternativos.



o
ZA
ANA
ECUTIVA

TÍTULO TERCERO

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

CAPÍTULO I.

De la definición

Artículo 77.- La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Artículo 78.- Los tipos de violencia contra las mujeres, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, puede ser de los tipos siguientes:

- I. Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
- II. Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
- III. Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
- IV. Violencia económica. Toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
- V. Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrar y concebirla como objeto.
- VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.



Artículo 79.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

- I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;

- II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;
- III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;
- IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
- V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;
- VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
- VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
- VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;
- IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;
- X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamar, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;
- XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;
- XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;



TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA

[Handwritten signature]

- XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;
- XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;
- XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;
- XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;
- XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;
- XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;
- XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;
- XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;
- XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o
- XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.



DEFENSORÍA
DPP
EJECUTIVA

Artículo 80.- Las víctimas tendrán los siguientes derechos:

- I. Ser tratadas sin discriminación, con respeto a su integridad y al ejercicio de sus derechos;
- II. Recibir información y asesoramiento gratuito sobre sus derechos y las vías jurídicas para acceder a ellos, a fin de que esté en condiciones de tomar una decisión libre e informada sobre cómo proceder;
- III. Recibir orientación sobre los procedimientos y las instituciones competentes para brindar atención en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género;

- IV. En caso de ser necesario contratar intérpretes, defensores y defensoras que conozcan su lengua, su cultura y que cuenten con capacitación adecuada, si se trata de personas indígenas o personas con discapacidad;
- V. Ser informadas del avance de las actuaciones del procedimiento;
- VI. Ser atendidas y protegidas de manera oportuna, efectiva y gratuita por personal especializado;
- VII. Que se le otorguen las medidas de protección necesarias para evitar que el daño sea irreparable;
- VIII. Recibir atención médica, asesoría jurídica y psicológica gratuita, integral y expedita;
- IX. A que la investigación se desarrolle con la debida diligencia y acceso a los mecanismos de justicia disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes;
- X. A que no se tomen represalias en su contra por el ejercicio de sus derechos;
- XI. A la reparación integral del daño sufrido; y
- XII. A que se respete su confidencialidad e intimidad.

Artículo 81.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. Tampoco se le podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su registro en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Segundo. Lo no previsto por el presente Reglamento será atendido por la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo con la normatividad interna del Partido Alianza Ciudadana y las leyes en materia electoral.

